

Legajo: S-079024/2021-I3
Id Audiencia: 50339
Descripción: ACTA DE AUDIENCIA - OGA

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
OFICINA DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS

Acta de Audiencia

Datos del Legajo:

Legajo: S-079024/2021-I3
Carátula: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN s/ HOMICIDIO CULPOSO

ART. 84 (1º PARR) - VICT.: ROBLES FACUNDO FEDERICO

Datos de la Audiencia :

Tipo de audiencia: Sentencia definitiva
Fecha: 09/10/2023
Sala: Sala Virtual 80
Centro Judicial: Capital
Juez interviniente: Dr. Agustín Francisco Puppio

Datos del Imputado:

Imputado: AGUERO, EDUARDO SEBASTIAN
D.N.I. Nº: 33.050.969
Domicilio real: PJE BELISARIO LOPEZ 1332 SAN CAYETANO
Comparece: SI
Detenido: NO

Datos de la Víctima:

Víctima (fallecida): ROBLES, FACUNDO FEDERICO

Datos de Familiares de la Víctima:

1) Interviniente: ROBLES, CARLOS ANTONIO
D.N.I. Nº: 27.945.887
Domicilio real: MZA A LOTE 10 Bº LA ESPERANZA
Teléfono: 3813926423
Comparece: SI (desde el estudio de su abogado)
2) Interviniente: BARRIONUEVO, ELENA DEL VALLE
D.N.I. Nº: 25.749.274
Domicilio real: MZA A LOTE 10 Bº LA ESPERANZA
Teléfono: 3816535533
Comparece: SI (desde el estudio de su abogado)

Datos de la Defensa:**Defensa Particular:**

RUIZ BELMONTE, NICOLAS ALEJANDRO

Domicilio Constituido:

nicolasruizbel@gmail.com

Datos de la Fiscalía:**Unidad Fiscal:**

Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas

Auxiliar Fiscal:

Rodríguez del Busto, Rogelio

Datos de la Querella:**Letrado o Apoderado:**

FERRARI, JOSE IGNACIO

Domicilio Constituido:

JOSEIFERRARI@HOTMAIL.COM

APELACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA**Intervención S.S.:****(02:00)**

Informa el objeto de la audiencia.

Pretensiones Querella:**(03:56)**

Fundamenta la procedencia del recurso. Expresa agravios en contra de lo resuelto en fecha 21/04/2023 por S.S. Dr. Zottoli. Solicita se declare la nulidad de la sentencia. En caso de hacerse lugar al planteo, solicita se aparte a la unidad fiscal y que la causa vuelva al estado procesal que corresponde. Brinda precisiones.

(48:02)

Réplica.

(01:04:35)

Dúplica. Consultado por S.S., manifiesta que sus representados no harán uso de la palabra.

Pretensiones MPF:**(22:47)**

Realiza breve reseña de la causa. Respecto de la procedencia no formula objeción. Entiende que no debe hacerse lugar al planteo de la querella. Solicita se rechace el planteo y se confirme el fallo de fecha 21/04/2023.

(01:00:17)

Réplica.

Pretensiones Defensa:**(40:47)**

Adhiere a lo manifestado por el MPF. Solicita se rechace la apelación interpuesta por la querella y se confirme lo resuelto por S.S. Dr. Zottoli en fecha 21/04/2023.

(01:03:15)

Réplica.

Intervención Imputado:**(01:06:05)**

Nada para manifestar.

OBSERVACIONES:

- S.S. informa a las partes que va a diferir el dictado de la resolución conforme lo establece el art. 315 del CPPT.

Datos complementarios a consignar por OGA:

Hora de inicio programada: 08:00

Hora real de inicio: 08:02

Hora finalización: 09:09

Registro de audio: Sí, a disposición de las partes.

Personal de acta: Nazareth Paliza Agüero

Número de registro digital: -----

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
OGA IMPUGNACION

ACTUACIONES N°: S-079024/2021-i3



H10107841529

**CARATULA: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO.
Legajo:S-079024/2021- i3**

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 22 de junio de 2023, se constituye el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, integrado de manera unipersonal a los efectos de resolver sobre la admisibilidad provisoria de la impugnación interpuesta en el marco del presente legajo.

CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 21 de abril de 2023, el juez Fernando Luis Zóttoli Ortíz, resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “1.- ACEPTAR y CONVALIDAR el CONVENIO de JUICIO ABREVIADO PLENO, formulado entre el Sr. Fiscal Dr. Diego Sebastián Hevia, a cargo de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del Centro Judicial Capital, y el acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, asistido por el Dr. Patricio Char Bodegue, abogado del foro local, con oposición de la querella, conforme lo normado por los arts. 376 y cc del CPPT; 2.- CONDENAR al acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, y de las restantes condiciones que constan en el registro audiovisual, a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del CP), Y SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para la conducción de vehículos con motor (arts. 20 bis, inc. 3° del CP; 337 y cc. del CPPT) por entender que el mismo resulta AUTOR, material y penalmente responsable del delito de Homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a 1 gr/l de sangre, en perjuicio de Robles Facundo Federico; por un hecho ocurrido en fecha 20/12/2021. (Arts. 45, y 84 bis, segundo párr, tercer supuesto del CP). Todo ello en las circunstancias previamente relatadas por el MPF en esta audiencia, todo ello a tenor del art. 376 y ss. del C.P.P.T; 3.- FIJAR al condenado las siguientes reglas de conducta por el término de TRES (03) AÑOS, todas ellas de conformidad a lo normado por el Art. 27 bis del Código Penal: a.- La promesa de someterse al procedimiento de ejecución condicional y no cometer hechos futuros en conflicto con la ley penal; b.- La obligación de fijar residencia en pje belisario lopez 1332; c.- La obligación de permanecer a disposición del tribunal y

concurrir a todas las citaciones que se le formulen; d.- La obligación de abstenerse de cometer nuevos hechos delictivos, de abusar de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; e.- La prohibición de salir de la provincia sin autorización previa del tribunal: 4.- IMPONER al acusado, conforme el acuerdo arribado por las partes, la obligación de: a.- Realizar un curso de educación y seguridad vial; b.- Realizar el pago de una reparación económica, consistente en la suma de \$100.000 (cien mil pesos), pagaderos en un solo pago en efectivo”.

Contra dicha sentencia, el abogado José Ignacio Ferrari, representante de la querella y del actor civil en este legajo, interpuso recurso de impugnación.

2. En consecuencia, corresponde realizar el análisis de admisibilidad (provisorio) del recurso interpuesto en los términos de los arts. 311 y 314 penúltimo párrafo del CPPT.

En primer lugar, corresponde analizar si el recurso fue interpuesto en el plazo acordado por la ley adjetiva.

Para interponer el recurso contra una sentencia definitiva, el plazo es de diez (10) días hábiles (art. 311 CPPT) y la fecha a partir de la cual comienza a correr ese plazo es la de la lectura integral de la sentencia (art. 291 del CPPT).

En este caso, los fundamentos de la sentencia fueron vertidos en la misma audiencia (21/04/2023) y el abogado Ferrari presentó el escrito con los fundamentos de su recurso vía Portal SAE el 09/05/2023 a hs. 09:29, por lo que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido (art. 311 del CPPT).

En segundo lugar, se debe analizar si se encuentra cumplido el requisito de impugnabilidad objetiva. En el caso, se trata de una decisión que acepta la aplicación del procedimiento abreviado y que, en consecuencia, dicta una sentencia condenatoria (definitiva), ambos supuestos previstos en el art. 301 del CPPT.

En relación a la impugnabilidad subjetiva, entiendo que no resulta aplicable al caso la limitación prevista en el art. 307 del CPPT (“El querellante podrá impugnar... la condena cuando la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida”), en virtud de que la fijación del monto de la pena fue el resultado de la aplicación del procedimiento abreviado (art. 376 del CPPT) al que la parte querellante se opuso, donde estaría involucrado, además, el derecho de la víctima a intervenir en el proceso (arts. 11 y 83 del CPPT, 25 de la CADH).

En tal sentido, además, el art. 3.2 de la ley 9.118 habilita el recurso de apelación para “aquellos casos en que la sentencia de Jueces Penales causen gravamen irreparable”, lo que sucede en este legajo al tratarse de una sentencia que, si bien es condenatoria, es la consecuencia de que haber aceptado la aplicación del procedimiento abreviado, la que cierra definitivamente el proceso por lo que no habrá posibilidad ulterior de reparar los derechos

que la querella considera conculcados.

Finalmente, en cuanto a la mención de los motivos y fundamentos del recurso que, de acuerdo al art. 311 tercer párrafo, deben expresarse cada uno por separado con su fundamento, la querella invocó los motivos previstos en los incs. 2 y 3 del art. 304 del CPPT expresando sus fundamentos en forma separada, por lo que este requisito se encuentra cumplido.

En el marco del art. 314 sexto párrafo del CPPT, cuyo análisis, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es “al sólo efecto de evitar continuar con el trámite de un cuestionamiento que pudiera presentarse como manifiestamente inadmisibles o mal concedido, con el desgaste inútil que implicaría tener que llamar a audiencia oral para recién expedirse en tal sentido. Partiendo de esa base, la habilitación provisoria realizada no provoca gravamen irreparable alguno, ya que la parte beneficiada por la sentencia recurrida podrá, en caso que lo estimara pertinente, controvertir la admisibilidad de la impugnación en la misma audiencia” (causa “Muro Sergio Orlando, Mendelek Juan Carlos y otros s/ Malversación de caudales públicos y otros delitos -art. 260”, sentencia N° 162, entre otros), corresponde sea declarado admisible con carácter provisorio (arts. 295, 301, 304, 306, 314 y concordantes del CPPT).

Por último, corresponde pase a OGA a fines de que prosiga con el trámite del legajo según lo previsto por el art. 314 sexto párrafo del CPPT y se convoque a audiencia dentro del plazo legal.

Por lo que se

RESUELVE:

1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE, con carácter provisorio, el recurso de apelación/impugnación interpuesto por el abogado José Ignacio Ferrari, representante de la querella y del actor civil, en contra de la sentencia de fecha 21 de abril de 2023, dictada por el juez Fernando Luis Zóttoli Ortiz del Colegio de Jueces, conforme lo considerado (arts. 295, 301, 304, 307, 314 y concordantes del CPPT).

2) PASE a la OGA a fines de que prosiga con el trámite del legajo según lo previsto por el art. 314 sexto párrafo del CPPT y se convoque a audiencia dentro del plazo legal.

3) NOTIFÍQUESE a las partes por intermedio de OGA.

Agustín Francisco Puppio
Juez
Tribunal de Impugnación

NRO.SENT: 157 - FECHA SENT: 22/06/2023

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=PUPPIO Agustin Francisco, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20288838578, Fecha:22/06/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

Expediente: **S-079024/2021-I3**

Carátula: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN C/ ROBLES FACUNDO FEDERICO S/ HOMICIDIO CULPOSO ART. 84 (1º PARR)**

Unidad Judicial: **OGA IMPUGNACION**

Tipo Actuación: **IMPUGNACION - NO HACER LUGAR (UNIPERSONAL)**

Fecha Depósito: **26/10/2023 - 00:00**

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20313233465 - AGUERO, EDUARDO SEBASTIAN-ACUSADO/IMPUTADO

90000000000 - ROBLES, FACUNDO FEDERICO-VICTIMA

20365837636 - QUERELLA, -QUERELLANTE

20365837636 - ROBLES, CARLOS ANTONIO-QUERELLANTE

307155723181230 - UNIDAD FISCAL DE, ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS-FISCAL

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

OGA IMPUGNACION

ACTUACIONES N°: S-079024/2021-I3



H10107978209

Carátula: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN s/ HOMICIDIO CULPOSO ART. 84 (1º PARR) - VICT.: ROBLES FACUNDO FEDERICO - Legajo: S-079024/2021-I3

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 25 de octubre del 2023, se constituye el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, integrado de manera unipersonal por el juez Agustín Francisco Puppio, a los efectos de resolver la impugnación interpuesta por el abogado apoderado de la querella en contra de la sentencia dictada en audiencia de fecha 21/04/2023 por el juez subrogante del Colegio de Jueces Penales Fernando Luis Zóttoli Ortiz por la que resolvió: “1.- ACEPTAR y CONVALIDAR el CONVENIO de JUICIO ABREVIADO PLENO, formulado entre el Sr. Fiscal Dr. Diego Sebastián Hevia, a cargo de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del Centro Judicial Capital, y el acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, asistido por el Dr. Patricio Char Bodegue, abogado del foro local, con oposición de la querella, conforme lo normado por los arts. 376 y cc del CPPT; 2.- CONDENAR al acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, y de las restantes condiciones que constan en el registro audiovisual, a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del CP), Y SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para la conducción de vehículos con motor (arts. 20 bis, inc. 3º del CP; 337 y cc. del CPPT) por entender que el mismo resulta AUTOR, material y penalmente responsable del delito de Homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a 1 gr/l de sangre, en perjuicio de Robles Facundo Federico; por un hecho ocurrido en fecha 20/12/2021. (Arts. 45, y 84 bis, segundo párr, tercer supuesto del CP). Todo ello en las circunstancias previamente relatadas por el MPF en esta audiencia, todo ello a tenor del art. 376 y ss. del C.P.P.T; 3.- FIJAR al condenado las siguientes reglas de conducta por el término de TRES (03) AÑOS, todas ellas de conformidad a lo normado por el Art. 27 bis del Código Penal: a.- La promesa de someterse al procedimiento de ejecución condicional y no cometer hechos futuros en conflicto con la ley penal; b.- La obligación de fijar residencia en pje belisario lopez 1332; c.- La obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que se le formulen; d.- La obligación de abstenerse de cometer nuevos hechos delictivos, de abusar de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; e.- La prohibición de salir de la provincia sin autorización previa del tribunal; 4.- IMPONER al acusado, conforme el acuerdo arribado por las partes, la obligación de: a.- Realizar un curso de educación y seguridad vial; b.- Realizar el pago de una reparación económica, consistente en la suma de \$100.000 (cien mil pesos), pagaderos en un solo pago en efectivo; 5.- DISPONER EL CESE de todas las medidas de coerción del Art. 235 del CPPT que pesan sobre Agüero Eduardo Sebastián, siempre que este no se encontrare con otras vigentes a la fecha, dispuestas por cualquier autoridad judicial; 6.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales a los Dres. Jose Ignacio Ferrari y Patricio Char Bodegue, por sus actuaciones profesionales en el marco del presente proceso,

hasta tanto los mismos lo soliciten expresamente, acrediten su condición ante AFIP y propongan una base regulatoria a tal efecto; 7.- COSTAS al condenado conforme lo dispuesto por el Arts. 329, 330 y cc del CPPT; 29 inciso 3 del Código Penal; 8.- LÍBRENSE a través de OGA los oficios y notificaciones pertinentes, conforme lo resuelto en esta audiencia; 9.- Quedan todas las partes presentes debidamente notificadas. (arts. 112 y 131 CPPT); 10.- TENER PRESENTE el recurso de apelación formulado por el Dr. Jose Ignacio Ferrari, otorgándosele el plazo legal a los fines de que exprese sus agravios por escrito. (conf. Arts. 301, 307, 311 y cc del CPPT)”.

El 9 de octubre de 2023 se realizó la audiencia prevista en el art. 314 del CPPT de manera remota a través de la plataforma “Zoom” donde se debatieron oralmente los fundamentos del recurso, en la que intervinieron: el imputado Eduardo Sebastián Agüero; su abogado defensor Nicolás Ruiz Belmonte; el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto de la Unidad Fiscal de Atentado contra las Personas del Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) y el abogado José Ignacio Ferrari en representación de los querellantes Carlos Antonio Robles y Elena del Valle Barrionuevo, por lo que la impugnación se encuentra en condiciones de ser resuelta (art. 315 del CPPT).

Examen de admisibilidad

Dado que no se efectuaron reparos respecto de la admisibilidad que, de modo provisorio, se dispuso por sentencia de fecha 22 de junio de 2023, con base en los argumentos allí expuestos, corresponde declarar formalmente admisible el recurso en contra de la resolución de fecha 21 de abril de 2023 (arts. 295, 301, 304, 307, 311 y concordantes del CPPT) e ingresar en el estudio de los agravios para determinar su procedencia.

Examen de procedencia

1. En el escrito de interposición del recurso, el impugnante invocó como motivos de agravios: a) la inobservancia de una garantía constitucional y b) la errónea aplicación o interpretación de la ley penal formal. Cabe aclarar que, con relación al tipo de resolución impugnada, el código no prevé motivos taxativos, de forma tal que los invocados por el impugnante resultan admisibles.

2. Como primer agravio planteó la inobservancia de la garantía constitucional del debido proceso legal y del principio de legalidad por haberse realizado una audiencia de juicio abreviado por fuera de las etapas procesales reguladas por el CPPT ya que el juez, al aceptar la celebración de aquélla, lesionó la preclusión procesal, a pesar de que, conforme a la interpretación conjunta de los arts. 250 y 376 del CPPT, esa audiencia de juicio abreviado no se podía realizar en forma autónoma de la audiencia del control de la acusación.

En oportunidad de la audiencia de impugnación, al ampliar fundamentos, explicó que el 7 de junio de 2022 el MPF presentó el requerimiento de apertura a juicio, el cual es un acto conclusivo de la investigación penal preparatoria según el art. 250 del CPPT. En consecuencia, y en atención a lo establecido por el art. 376 del CPPT respecto de la oportunidad para abreviar el proceso, no debía haberse realizado una audiencia de juicio abreviado en forma autónoma, si no dentro del contexto de una audiencia de control de acusación en los términos del art. 261 inc. 8 del CPPT.

Expuso que, al acordar un juicio abreviado en la audiencia de etapa intermedia -incluso prescindiendo de la controversia sobre si ésta se abrió o no, o si se suspendió o no- las partes tienen que sujetarse al ofrecimiento probatorio realizado por el MPF en su requerimiento de apertura a juicio y por la defensa en el ofrecimiento de pruebas para el debate oral.

Manifestó que existió un error por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias (en adelante OGA) al agendar esa audiencia, la cual fue solicitada por el MPF, porque la Oficina tenía constancia de que existía un requerimiento de apertura a juicio y un traslado a la defensa para que ofrezca pruebas, conforme lo dispuesto en el art. 260 del CPPT.

Expresó que hubo un error en la sentencia dictada por este Tribunal de Impugnación el 06/02/2023 -correspondiente al Incidente nro. 2 de este legajo- al haberse ordenado el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio abreviado, ya que debió ordenarse la remisión del legajo para la fijación de la audiencia de la etapa intermedia.

3. Con respecto a este primer agravio, el MPF en su contestación por escrito, sostuvo que aunque la defensa consideró que se modificó la esencia de la estructura del debido proceso al admitirse la realización de una audiencia por fuera de las etapas procesales, esta cuestión quedó zanjada por el

juez Zóttoli, quien resolvió que no se trataba de un control de acusación, sino de una audiencia autónoma de juicio abreviado, tal cual fue solicitada.

Señaló que, a pesar de que se tome por válida la circunstancia alegada por la querella, tampoco hubo una vulneración del debido proceso y del principio de legalidad. Transcribió el comentario al art. 376 del CPPT del Código Procesal Penal de Tucumán comentado y anotado por Vilecco y Montilla Zavalía, en el tomo IV, página 404, donde dice: “En cuanto al límite temporal máximo en el que las partes podrán acudir a este instituto, si bien de la letra de la disposición en estudio parecería dado por la formulación de acusación por cuanto dicho acto cierra la etapa preparatoria, consideramos que pueden hacerlo incluso durante la audiencia de control de la acusación, que forma parte de la etapa intermedia. Es que entre las posibilidades que se le reconoce a la defensa en dicha oportunidad se encuentra la de solicitar alguna de las modalidades del juicio abreviado (CPPT, art. 261 inc. 8). Sin perjuicio de nuestra opinión cabe tener en cuenta el criterio de Piedrabuena, quien al comentar una norma del Código Procesal Penal de Neuquén que al igual que la comentada circunscribe la posibilidad de abreviar el proceso a la etapa preparatoria, sostiene ‘[...] si bien el artículo establece como oportunidad procesal para requerir el juicio abreviado a la etapa preparatoria, la jurisprudencia es pacífica en admitir que el requerimiento pueda ser acogido aun cuando se efectúe después de esta oportunidad, hasta el momento anterior a la iniciación del debate oral’. Agrega el autor, que en caso de llevarse a cabo el acuerdo fuera de la oportunidad prevista en la ley, se requiere a las partes peticionantes que sucintamente justifiquen los motivos que impidieron su realización con anterioridad”.

En otro orden de ideas, apuntó que aun cuando el art. 377 del CPPT alude al término “las partes”, de ello no puede inferirse que todas las partes deban estar de acuerdo para la admisión del juicio penal abreviado; que el legislador fue nítido al establecer que acordar la abreviación del procedimiento es una facultad alternativa que tienen las partes que se vincula directamente con las ventajas que ofrece para el engranaje penal y para el imputado que está sometido a un proceso.

Refirió que en esa línea se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (en adelante CSJT) en el fallo “Barrera”, en donde expresó: “a través de este instituto se trata de descongestionar el abarrotamiento de causas en trámite y sin sentencia, por medio de una simplificación del proceso que permita una mayor celeridad en su resolución. (...) con la práctica del mismo se ahorran ingentes esfuerzos jurisdiccionales en causas que no los merecen, y luego ellos son reinvertidos en otras causas que sí demandan una mayor atención y dedicación por parte de los tribunales de justicia” (CSJT, 26/02/2014, “Barrera Luis Florencio s/robo agravado en grado de tentativa”, sentencia N° 90).

Además, expuso: “si se tiene en cuenta que el querellante procura la actuación efectiva de la ley penal mediante la demostración del hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, a través de la abreviación del proceso podrá ver satisfecha su pretensión con el dictado de la sentencia de condena. En virtud de ello podría decirse que es razonable pensar como límite al derecho del querellante el logro de la condena del imputado, ya que extender dicho límite a que consiga imponer la sanción que él considere suficiente importaría violar el principio constitucional de paridad de armas entre imputado y víctima. En definitiva, procurando el querellante la condena del acusado, al producirse ello a través del juicio abreviado, su pretensión resulta sustancialmente acogida por la sentencia que así lo dispone, sin perjuicio de que la pena acordada le pueda parecer insuficiente”.

Argumentó que si el consentimiento del querellante fuera un recaudo necesario para un acuerdo de juicio abreviado, el legislador hubiese empleado la redacción del Código Procesal Penal de Neuquén -fuente recurrente del CPPT- que expresamente establece como requisito de admisibilidad que “el fiscal y el querellante manifiesten su conformidad” (art. 217 inc. 2 de dicho código).

Respecto al rol de la querella en los juicios penales abreviados citó el antecedente de la CSJT “Reyes Franco Alejandro y Reina Angel Ariel s/ homicidio culposo - art. 84 Bis (1o Parr.) - Incidente de per saltum”, n° expte: C- 034042/2020-I2, sentencia de fecha 12/04/2022 y del Tribunal de Impugnación (Concepción) “Meneghello Oscar Francisco s/ homicidio simple”, n° expte: C- 006328/2021-I1, sentencia de fecha 22/06/2022, en donde, en línea generales, se sentó el criterio que, ante una oposición razonable de la querella respecto de un juicio abreviado, es la intervención del juez, como garante del proceso, la que permite resolver los desacuerdos en base a las consideraciones y argumentos de las partes.

Al tomar la palabra en audiencia de impugnación, el auxiliar fiscal sostuvo que, a contrario de lo que planteó la querella, se respetó el debido proceso al dar cumplimiento con lo decidido por este tribunal al realizarse una nueva audiencia autónoma de juicio abreviado, por lo que no se trató de una audiencia de control de acusación.

Sobre este punto, dijo que el juez Zóttoli dejó en claro al decir que se iba a tratar la cuestión en el marco de una audiencia autónoma de juicio abreviado, como estaba ordenado e incluso aludió a que estaba cumpliendo con la resolución del Tribunal de Impugnación.

Por otra parte, señaló que si el representante de la querella consideró que hubo un error en la sentencia de impugnación, debería haber planteado el recurso que considerara correspondiente.

También planteó que el art. 376 del CPPT no es de aplicación automática respecto al límite temporal para abreviar el proceso; que en su unidad fiscal se llegaron a acuerdos de este tipo aun luego de los alegatos de apertura en la instancia del debate oral.

Finalmente, añadió que el interés por parte de la querella de encauzar este convenio de juicio abreviado pleno dentro de un control de acusación recae directamente en su intención de acordar también la acción civil, porque si el juicio abreviado se trata dentro de la audiencia de etapa intermedia, cuando hay constitución de un actor civil, es requisito para su procedencia que se resuelvan ambas cuestiones.

Sobre la base de tales argumentos solicitó que se rechace el primer agravio.

4. Como segundo agravio el impugnante invocó la inobservancia del art. 376 del CPPT. Refiere que ello le generó un perjuicio concreto consistente en que, al momento de convenir el acuerdo de juicio abreviado, la defensa y el MPF utilizaron como elementos probatorios para fundamentar el monto y la modalidad de la pena, el informe toxicológico de Facundo Robles y el examen médico forense de Sebastián Agüero, los que no fueron ofrecidos por ninguna de esas partes.

Insistió en que si el juicio abreviado se realiza dentro de la audiencia de etapa intermedia, el acuerdo está limitado a los hechos y a los elementos probatorios que el MPF ofreció en su requerimiento de apertura a juicio y a las pruebas ofrecidas por la defensa.

En su intervención en la audiencia de impugnación circunscribió este agravio únicamente a la evidencia relativa al dosaje de alcohol en sangre positivo de la víctima por haber sido utilizado como una circunstancia atenuante de la pena por parte del MPF al momento de fundamentar el monto de la sanción.

Finalmente, frente al pedido de precisiones por parte del tribunal sobre si únicamente se incorporó el dosaje de la víctima, aclaró que también se agregó un examen médico legal del imputado, que fue valorado por el MPF para quitar el agravante de la fuga de la calificación legal; pero que, en definitiva, lo que el juez Zóttoli valoró positivamente fue el dosaje de alcohol de la víctima a los efectos de atenuar la pena.

5. En lo concerniente a este segundo motivo de agravio el MPF refirió que los elementos probatorios a los que hace referencia el recurrente no fueron ofrecidos en el requerimiento de apertura a juicio porque se trataban de pruebas de descargo; no obstante, eran evidencias que ya se habían incorporado durante la investigación penal preparatoria.

Además, dijo que en la sentencia del Tribunal de Impugnación se requirió la valoración de circunstancias agravantes y atenuantes de los arts. 40 y 41 del CP en un nuevo tratamiento de un juicio penal abreviado, por lo que eran elementos que debían ser analizados para la fundamentación de la pena.

Sobre este punto, aludió al comentario del art. 263 del CPPT del Código Procesal Penal de Tucumán comentado y anotado de los autores Vilecco y Montilla Zavalía, en el tomo IV, página 208, quienes señalan que el control de admisibilidad de elementos probatorios ofrecidos por todas las partes en relación a las exigencias de pertinencia, relevancia, no sobreabundancia y legalidad operan como garantía para la defensa porque así restringen la actividad probatoria de los acusadores en torno al hecho que se reaccrimina y a que las evidencias sean efectivamente útiles. Por tal motivo, indicó que, como sostiene la doctrina, en caso de duda respecto a la admisión de elementos probatorios ofrecidos por el fiscal o el querellante, debe estarse por su rechazo, mientras que de suceder ello con los ofrecidos por la defensa debe adoptarse un criterio menos restrictivo.

Finalmente, citó como precedente jurisprudencial el legajo “Cisnero, Adrian Alejandro (a) Caña s/ homicidio simple, en grado de tentativa agravado por el empleo de arma de fuego - Vict: Flores Dionisio Horacio” legajo n° S-049631/2022, en donde la jueza Carmen Rosa López del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, admitió en oportunidad de los alegatos de apertura prueba testimonial ofrecida por la querella.

Por lo expuesto, consideró que “no debemos desconocer los efectos de un Juicio Abreviado, que no deja de ser un juicio, que debe ser valorado y analizado, ajustándose a los requisitos exigidos en el juicio común, de acuerdo a lo que establece el art. 377”.

Al tomar la palabra en la audiencia ante este Tribunal de Impugnación, el auxiliar fiscal explicó que también se tuvo en cuenta, a los fines de determinar el monto de la pena y como atenuantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, que estaba lloviendo, que la iluminación era muy escasa, que el imputado era un sujeto primario sin condena previa, que con la pena condicional se protegía el derecho al trabajo del imputado, que éste se sometió al procedimiento abreviado y que reconoció el hecho.

En consecuencia, solicitó que se confirme la sentencia impugnada.

6. Por su lado, el abogado defensor de Agüero no formuló contestación por escrito y en la audiencia de impugnación se adhirió, en líneas generales, a la postura del MPF.

7. En la audiencia de impugnación, al hacer uso de su derecho a réplica, el representante de la querella expresó que: i) en ningún momento dijo que el tratamiento del juicio penal abreviado le generó un perjuicio en términos civiles; ii) las reglas del debate de juicio oral establecen que si las partes ofrecen elementos probatorios tiene que haber acuerdo entre todas ellas y es lo que evidentemente sucedió en la causa Cisnero, en donde se garantizó el derecho al contradictorio y iii) no tenía recurso alguno para impugnar la sentencia del Tribunal de Impugnación de fecha 06/02/2023 porque no cabía interponer un recurso de aclaratoria ni un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

8. En cuanto a la pretensión de la querella al interponer su recurso o, dicho en otros términos, la solución del caso concreto que requiere a éste tribunal, se observa que en el petitorio de su escrito recursivo solicitó que se declare nula la audiencia realizada y todo acto consecuente, “en especial la sentencia puesta en crisis”.

En tanto, en la audiencia de impugnación fue requerido a los efectos de que precise su solicitud a éste tribunal en los siguientes términos:

Juez: “Dos precisiones les voy a pedir. Una, con relación al petitorio. O sea, usted pide que este Tribunal de Impugnación dicte, digamos, resolución sustitutiva, ejerza competencia positiva y rechace el juicio abreviado a los fines de avanzar hacia un juicio oral. ¿Esa sería su petición? ¿O que anule y reenvíe?”

Querellante: “No, es que entiendo, doctor, que anulando no podría dictar sustitutiva. Por lo tanto, lo que se plantea es que se anule la sentencia del 21 de abril. Lo que yo le hacía la aclaración es que en la impugnación pasada se había reenviado a hacer de nuevo el juicio abreviado. Yo creo que ahí hubo un error por parte de la sentencia porque lo que corresponde es que se reenvíe al estado procesal de la causa, que es la audiencia de control de acusación. Entiendo que no habría posibilidad de dictar sentencia sustitutiva en este caso, tanto con el reenvío o haciendo lugar a la nulidad”.

9. De esta forma han quedado planteadas las posiciones sobre la cuestión a resolver, en base a lo que considero sustancial de los argumentos de las partes, sin perjuicio de que aquellas manifestaciones constan en el registro audiovisual (art. 111 del CPPT), integran la presente resolución y que la totalidad de ellas, junto con los escritos recursivos y de contestación y el video de la audiencia donde se dictó la resolución recurrida, serán tenidas en cuenta para el análisis y la decisión del recurso.

Corresponde entonces ingresar en el examen de las cuestiones planteadas para lo cual me ceñiré a los motivos que invocó el impugnante a los efectos de determinar si ellos efectivamente se materializaron en la decisión apelada, salvo que se advierta alguna cuestión que amerite el control de constitucionalidad de oficio (art. 296 del CPPT).

Ahora bien, al examinar los agravios expresados en el escrito recursivo y desarrollados en la audiencia, se observa que éstos se dirigen centralmente, por un lado, a impugnar la validez del juicio penal abreviado por haberse llevado a cabo en una audiencia autónoma y no “dentro” o “en el contexto” de la audiencia de la etapa intermedia y, por el otro, como derivación de lo anterior, a cuestionar que se haya incorporado como medio de prueba el informe toxicológico de la víctima a los efectos de ser utilizado como elemento atenuante de la pena cuando éste no había sido ofrecido previamente por las partes.

Seguidamente daré tratamiento a las cuestiones planteadas en forma conjunta para una mejor comprensión de la solución del caso y en virtud de la estrecha vinculación que tienen entre sí.

10. Para ello resulta necesario aludir a lo resuelto por el juez Zóttoli en la audiencia de fecha 21/04/2023 respecto del tratamiento del juicio penal abreviado en una audiencia autónoma y no en una audiencia de etapa intermedia y de la valoración del informe toxicológico de la víctima.

De la compulsa del registro audiovisual de la mencionada audiencia, surge que éste expresó: “Entiendo de que estamos en presencia de una audiencia autónoma, donde las partes, como todos sabemos en este nuevo sistema adversarial, pueden solicitar audiencia y pueden hacer los planteos con acuerdos de parte que requieran a los fines de elaborar su teoría del caso. Entiendo de que estaríamos en presencia de una audiencia autónoma que no se llegó a tratar y no se ingresó al tratamiento de la audiencia de control de acusación, por lo que no encuentro ninguna afectación en que se lleve a cabo esta audiencia autónoma en estos términos y voy a abrir la audiencia doctor con el objeto de acuerdo de juicio abreviado”.

Luego, con relación a la determinación de la pena y al informe toxicológico de la víctima, manifestó: “Entiendo también de que es ajustada la pena de 3 años de ejecución condicional y 7 años de inhabilitación especial para la conducción de un vehículo con motor. La misma se encuentra dentro de la escala penal en abstracto prevista para el delito pretendido y que la determinación de la pena está debidamente fundamentada. Entiendo de que es una pena de ejecución condicional atento a que es un sujeto primario, es decir, no tiene antecedentes penales, a los fines de resocialización de la pena puede beneficiarse con esta condicionalidad de la pena. Entiendo también de que reviste especial valoración en lo que refiere a la naturaleza de la acción: es un delito imprudente, un delito culposo. Las circunstancias en la que se dio lugar, era de noche, había iluminación escasa y esto fue corroborado no solamente por las pericia sino también por los testimonios de distintas personas que llegaron al lugar, una de esas es la persona que trabaja en el country de San Pablo, quien declaró en ese sentido y entiendo que esto hace a una atenuante para poder llegar a este mínimo de la pena. Las condiciones personales también del imputado, es decir, es un sujeto primario, no cuenta con condenas anteriores, no tiene causa ni contravenciones policiales pendientes, tiene una edad de 34 años y tiene cuatro hijos menores cuyas edades son de 6, 8, 13, 15 años, lo que entiendo que no encuentro peligrosidad en el mismo los fines de imponer una pena que la pena no sea de una condena condicional, entiendo que puede reinsertarse en la sociedad y mejorar sus conductas. Asimismo, estaría en condiciones de volver a trabajar en las fuerzas policiales, que lo evaluó también como un atenuante en el sentido de que tiene un trabajo estable y era un trabajador. Ahora bien, entiendo también que esta voluntad de someterse al proceso de juicio abreviado configura el fin resocializador de la pena por lo que voy a hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado”.

11. Para resolver sobre la procedencia del recurso es preciso aclarar, en primer lugar, que la sentencia de fecha 06/02/2023 dictada por mi parte, en su parte dispositiva expresó: “1) DECLARAR formalmente admisible el recurso de apelación/impugnación en contra de la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 intentado por el abogado José Ignacio Ferrari, representante de la querella y del actor civil, en los puntos que fueron materia de agravio (arts.11, 295, 301, 304, 311, 314 y concordantes del CPPT, 3.2 de la ley 9119 y 25 de la CADH); 2) HACER LUGAR al recurso interpuesto, ANULAR la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 y REENVIAR el legajo al Colegio de Jueces para que un tribunal diferente emita un nuevo pronunciamiento previa realización de una nueva audiencia de juicio penal abreviado que corresponde realizar, conforme lo considerado (arts. 1, 9, 11, 13, 83, 138.2.b, 140, 289, 295, 296, 315, 317, 377 y concordantes del CPPT); 3) COSTAS por el orden causado, conforme lo considerado (arts. 329, 330 del CPPT)...”.

Dicha resolución no fue objeto de recurso o impugnación por ninguna de las partes, habiendo adquirido firmeza.

Si bien ahora el abogado de la querella manifiesta que esa decisión sobre el punto del reenvío a una audiencia de juicio abreviado habría sido “errónea”, lo cierto es que no hizo uso de las vías

recursivas pertinentes (en el caso el control extraordinario) que justamente tienen por objeto corregir los errores o vicios que presenten las decisiones judiciales. La justificación ensayada por el abogado de que no era susceptible de recurso alguno, sin mayores desarrollos, aparece como infundada.

No obstante ello, el propio representante de la querella, durante la audiencia para tratar este recurso, prescindió de seguir controvirtiendo el tipo de audiencia en el que se hizo lugar al convenio de juicio abreviado al decir textualmente: “Y lo que yo quiero plantearle, doctor, que todo esto tendría que haber ocurrido en el contexto de una audiencia de control de la acusación, sea que - porque esto también se discutió en la última audiencia- si realmente esa audiencia de control ocurrió o no, si se abrió, si se suspendió, lo cierto es, prescindiendo de eso, este juicio abreviado se tendría que haber tratado en los términos del artículo 261, inciso 8”. Es decir, limitó su agravio a que el juicio abreviado debía celebrarse en una audiencia de etapa intermedia y dejó de lado el cuestionamiento de que la audiencia del 21/04/2023 haya sido una continuación de una audiencia suspendida de control de acusación y admisibilidad de prueba.

De todas maneras, considero que el planteo sustancial del querellante no tiene trascendencia en ningún caso puesto que nada obsta a que el objeto de una audiencia sea reconvertido. Esta es, precisamente, la posibilidad que prevé la norma del art. 261 inc. 8 del CPPT: al presentarse una propuesta de juicio abreviado, aún cuando la OGA haya fijado la audiencia a los efectos de “debatir y resolver las cuestiones propias de esta etapa” -conforme el primer párrafo de la norma- la audiencia se reconduce o se reconfigura como una destinada a resolver alguna de las modalidades del juicio abreviado, por lo que corresponde aplicar la normativa respectiva (arts. 376 y siguientes del CPPT).

Como derivación de lo anterior, lo sostenido por la parte querellante en cuanto a que los elementos probatorios que servirán de base al acuerdo abreviado deban ser exclusivamente aquellos que hayan sido ofrecidos por el fiscal en el requerimiento de apertura a juicio y por la defensa en su contestación no surge de manera expresa ni es deducible de la norma del art. 261 del CPPT.

De hecho los ofrecimientos probatorios previstos en los arts. 257, 258 y 259 del CPPT tienen en vista la realización del juicio oral mientras que el acuerdo abreviado es un procedimiento especial (previsto como tal en el código en el libro VII “Procesos especiales y abreviados”). Éste último efectúa una remisión al proceso de juicio común pero sólo en lo pertinente, lo que deja en evidencia que, en lo demás, se rige por sus propias normas.

En materia de prueba el art. 142 segundo párrafo del CPPT prevé la utilización de las evidencias recolectadas en la etapa preparatoria para fundamentar un juicio penal abreviado, en tanto dispone que: “Las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado, salvo aquellas que fueran recibidas de conformidad con las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba. No obstante aquellas podrán invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar, plantear excepciones, instar el sobreseimiento, propiciar la aplicación de algún criterio de disponibilidad de la acción penal o dictar sentencia en el juicio abreviado”.

El informe toxicológico de la víctima fue una evidencia recolectada durante la etapa preparatoria, tal como lo manifestó el MPF en su contestación por escrito y en la audiencia de impugnación, información que no fue controvertida por el impugnante, por lo que nada obsta a que sea considerado como evidencia que fundamente algún aspecto de la resolución que debe dictar el juez, en los términos del art. 377 segundo párrafo del CPPT.

Sobre éste punto, González Postigo, al tratar el tema de la audiencia del control de la acusación, señala: “Como cuestión preliminar, las partes también podrán proponer la discusión de una salida alternativa o un proceso abreviado como consecuencia del acuerdo que hayan alcanzado de forma previa a la realización de la audiencia o producto de la invitación a acordar que les haga el juez o la jueza” (González Postigo, Leonel, *Juezas y jueces de garantías en la litigación penal*, Didot, Buenos Aires, 2021, pág. 166).

En consecuencia, si una vez agendada la audiencia de control de la acusación -como le expresaron al juez en la audiencia que sucedió en éste caso-, se plantea como cuestión previa la suscripción de un acuerdo de procedimiento abreviado son las reglas de éste último las que se aplican pues es el nuevo objeto de la audiencia, conforme lo antes explicado.

Por ende, lo sostenido por la querella como agravios concretos debe ser rechazado.

12. Debo mencionar, además, la falta de precisión sobre la resolución que el recurrente pide a éste tribunal, como quedó evidenciado en el punto 8 de ésta resolución, pues alude a una declaración de nulidad y la “continuación” de la audiencia de control de la acusación.

Sobre éste punto es preciso recordar que “Siguiendo a Alfredo A. Elosú Larumbe, podemos decir que una interpretación sistémica de este párrafo con los restantes párrafos del mencionado artículo (en referencia al art. 315 del CPPT) le posibilita al Tribunal de Impugnación, al resolver el recurso de impugnación ordinaria, optar básicamente por tres caminos a seguir: a) Confirmar la sentencia del Tribunal de Juicio: En este caso el recurso se rechaza por no verificarse los agravios expuestos. La confirmación puede ser total o parcial, lo que implica que aquella parte de la resolución que no fue alcanzada por la confirmación sea revocada o anulada. b) Revocar: La revocación implica declarar la procedencia del recurso por haberse verificado la materialización de los agravios invocados. Puede ser total o parcial. La revocación lleva ínsita la necesidad de resolver la cuestión de manera directa conforme a derecho. En el mismo decisorio el tribunal revoca y modifica la resolución dictada por el a quo. Si la revocación es parcial el tribunal deberá ejercer competencia positiva limitada a los puntos revocados. c) Anular: La anulación también implica el reconocimiento de la existencia de los agravios planteados por el impugnante -el recurso es procedente-. La diferencia con la revocación radica en el procedimiento que debe seguirse a partir de cada una de ellas. La revocación, como vimos, lleva a la modificación de la resolución por el propio tribunal; y la anulación, en principio, conduce al reenvío del caso al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución o sentencia” (CSJT, “Giménez Esteban Antonio y otros s/ Homicidio agravado -art. 80 inc 6º-”, sentencia de fecha 15/06/2022).

13. Como conclusión de lo desarrollado puede sostenerse que no se verifica la existencia de los motivos de agravio planteados por el representante de la querella, pues no se observa violación al debido proceso legal ni una errónea aplicación de la normativa procesal.

En el caso particular puede advertirse que la oposición de la parte querellante, ya respecto de los términos del acuerdo de procedimiento abreviado arribado entre la fiscalía y el imputado, se sustentó, según se desprende de la audiencia ante el juez del Colegio de Jueces, en su desacuerdo sobre el monto de la pena y en una genérica falta de participación en el procedimiento. Al ser preguntado el abogado del querellante por el juez: “Doctor, puntualmente entonces La oposición de usted es en relación a la determinación de la pena, ¿es así?”, respondió: “Y también en la no participación de esta querella, porque nos siguen notificando de convenios de juicios abreviados sin siquiera escucharnos”. Es decir, no sostuvo una teoría del caso diversa, una versión de los hechos diferente ni se agravio de la calificación legal.

No obstante, dicho monto de pena se encuentra dentro de los límites legales y ha sido debidamente motivada su solicitud por el MPF, conforme puede observarse en la audiencia ante el Colegio de Jueces y, además, el juez interviniente también expresó los fundamentos sobre punto. Éstos argumentos de fondo no fueron motivo de agravio por el impugnante en el marco de éste recurso, cuyo cuestionamiento, tal como se vio, estuvo dirigido a cuestiones relativas a la aplicación de la ley procesal.

La CSJT ya ha sentado el criterio de interpretación sobre el art. 376 al expresar: “... no resulta lógico que en los procesos abreviados se genere una situación aparente, donde sólo se garantiza la presencia de la querella en la audiencia donde la Fiscalía y la defensa presentan un acuerdo de juicio abreviado, sin que deban atenderse y contemplarse los argumentos por los cuales se opone al acuerdo, sobre todo cuando la querella brinda una nueva teoría del caso diferente en tanto esto sería contrario al deber de brindar a las personas una sentencia fundada (CSJT, 17/12/2021, “Rojas José, Gómez Gustavo Ariel, Rojas Marcos Ariel y otros s/homicidio agravado”, sentencia nro. 1291).

En este caso concreto, como ya dije, la querella no brinda una teoría del caso diferente. La falta de acuerdo de la querella con la aplicación de un juicio abreviado no impide su presentación, cuestión que también ha sido objeto del antecedente citado de la CSJT: “Pero tampoco resulta coherente establecer un sistema en donde la querella deba manifestar conformidad con un acuerdo de juicio abreviado para recién poder ser planteado ante el juez, toda vez que esta solución sería postergar al Ministerio Público Fiscal, quien no fue relegado de su función de ejercer la acción penal pública”.

También explicó: “Este es el modelo que siguen, incluso, todos los códigos procesales adversariales -aquellos que expresamente mencionan la palabra querellas-; le dan al juez la posibilidad de analizar la razonabilidad de la propuesta, al igual que la oposición. Se maneja así un equilibrio entre la necesidad de un acuerdo como condición indispensable y una mera participación sin tener ningún

valor vinculante. Se trata entonces, de requerir un acuerdo, pero que deberá estar dentro de los límites de lo razonable en términos de derecho”.

Posteriormente reiteró tales conceptos en el caso “Reyes” citado por el representante del MPF: “En definitiva, esta Corte Suprema de Justicia definió que no existe ningún impedimento formal que obstaculice que el Ministerio Público Fiscal y la parte acusada pongan en debate un acuerdo de juicio abreviado al que accedieron sin el consentimiento de la querella. No obstante, posteriormente, ésta debe tener la oportunidad de fijar su posición al respecto. Recién allí, el órgano jurisdiccional interviniente deberá darle tratamiento y decidir lo que corresponda ponderando la legitimidad y razonabilidad de las posturas adoptadas. Cabe resaltar que existen en el nuevo digesto procesal herramientas que facilitan adoptar posturas que respondan a ambas partes acusadoras; a saber: arts. 91 y 380 NCPPT”.

En definitiva, los motivos concretos de oposición respecto de los términos del acuerdo arribado entre la fiscalía y el imputado -cuestionamiento al monto de la pena- han sido planteados en la audiencia por la parte querellante, sin que en esta instancia se haya agravado en concreto sobre los fundamentos del juez de grado sobre éstos puntos. Su argumento se ha limitado a la utilización de un sólo elemento de prueba -el informe toxicológico de la víctima- sin haberse agravado del conjunto de elementos que, según manifestó la fiscalía en la audiencia, habrían sido objeto de valoración conjunta para determinar el monto de la pena.

14. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de impugnación respecto de la sentencia de fecha 21/04/2023, con costas al impugnante por el principio objetivo de la derrota (arts. 315, 329 y 330 del CPPT y 62 del CPCyCT).

En cuanto a los honorarios se difiere el pronunciamiento para cuando los abogados intervinientes lo soliciten y acrediten su condición ante el organismo fiscal.

Por ello,

RESUELVO:

1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación/impugnación interpuesto por el abogado José Ignacio Ferrari, como representante de la querella, conforme lo considerado (arts. 295, 301, 304, 307, 311, 314 y concordantes del CPPT).

2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación/impugnación interpuesto por la querella y, en consecuencia, **CONFIRMAR** la sentencia de fecha 21/04/2023 en cuanto fuera materia de agravio, conforme lo considerado (arts. 9, 112, 296, 315 y concordantes del CPPT).

3) COSTAS al impugnante (arts. 329, 330 del CPPT y 62 del CPCyCT).

4) RESERVAR el pronunciamiento sobre honorarios para cuando los abogados intervinientes lo soliciten y acrediten su condición ante el organismo fiscal.

5) NOTIFICAR a las partes por intermedio de la OGA y al imputado en forma personal bajo constancia de firma de los argumentos íntegros de la presente sentencia.

Agustín Francisco Puppio

Juez

Tribunal de Impugnación

Actuación firmada en fecha 25/10/2023

Certificado digital:

CN=PUPPIO Agustín Francisco, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20288838578

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

Expediente: **S-079024/2021-I3**

Carátula: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN C/ ROBLES FACUNDO FEDERICO S/ HOMICIDIO CULPOSO ART. 84 (1º PARR)**

Unidad Judicial: **OGA IMPUGNACION**

Tipo Actuación: **IMPUGNACION ADMISIBLE**

Fecha Depósito: **23/06/2023 - 00:00**

Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:

20313233465 - AGUERO, EDUARDO SEBASTIAN-ACUSADO/IMPUTADO

90000000000 - ROBLES, FACUNDO FEDERICO-VICTIMA

20365837636 - ROBLES, CARLOS ANTONIO-QUERELLANTE

307155723181230 - UNIDAD FISCAL DE, ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS-FISCAL

20365837636 - QUERELLA, -QUERELLANTE

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

OGA IMPUGNACION

ACTUACIONES N°: S-079024/2021-I3



H10107841529

CARATULA: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO. Legajo:S-079024/2021- i3

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 22 de junio de 2023, se constituye el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, integrado de manera unipersonal a los efectos de resolver sobre la admisibilidad provisoria de la impugnación interpuesta en el marco del presente legajo.

CONSIDERANDO:

1. Por sentencia de fecha 21 de abril de 2023, el juez Fernando Luis Zóttoli Ortiz, resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “1.- ACEPTAR y CONVALIDAR el CONVENIO de JUICIO ABREVIADO PLENO, formulado entre el Sr. Fiscal Dr. Diego Sebastián Hevia, a cargo de la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas del Centro Judicial Capital, y el acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, asistido por el Dr. Patricio Char Bodegue, abogado del foro local, con oposición de la querella, conforme lo normado por los arts. 376 y cc del CPPT; 2.- CONDENAR al acusado Agüero Eduardo Sebastián, DNI: 33.050.969, y de las restantes condiciones que constan en el registro audiovisual, a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del CP), Y SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para la conducción de vehículos con motor (arts. 20 bis, inc. 3º del CP; 337 y cc. del CPPT) por entender que el mismo resulta AUTOR, material y penalmente responsable del delito de Homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a 1 gr/l de sangre, en perjuicio de Robles Facundo Federico; por un hecho ocurrido en fecha 20/12/2021. (Arts. 45, y 84 bis, segundo párr, tercer supuesto del CP). Todo ello en las circunstancias previamente relatadas por el MPF en esta audiencia, todo ello a tenor del art. 376 y ss. del C.P.P.T; 3.- FIJAR al condenado las siguientes reglas de conducta por el término de TRES (03) AÑOS, todas ellas de conformidad a lo normado por el Art. 27 bis del Código Penal: a.- La promesa de someterse al procedimiento de ejecución condicional y no cometer hechos futuros en conflicto con la ley penal; b.- La obligación de fijar residencia en pje belisario lopez 1332; c.- La obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que se le formulen; d.- La obligación de abstenerse de cometer nuevos hechos delictivos, de abusar de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; e.- La prohibición de salir de la provincia sin autorización previa del tribunal; 4.- IMPONER al acusado, conforme el acuerdo arribado por las partes, la obligación de: a.- Realizar un curso de educación y seguridad vial; b.- Realizar el pago de una reparación económica, consistente en la suma de \$100.000 (cien mil pesos), pagaderos en un solo pago en efectivo”.

Contra dicha sentencia, el abogado José Ignacio Ferrari, representante de la querella y del actor civil en este legajo, interpuso recurso de impugnación.

2. En consecuencia, corresponde realizar el análisis de admisibilidad (provisorio) del recurso interpuesto en los términos de los arts. 311 y 314 penúltimo párrafo del CPPT.

En primer lugar, corresponde analizar si el recurso fue interpuesto en el plazo acordado por la ley adjetiva.

Para interponer el recurso contra una sentencia definitiva, el plazo es de diez (10) días hábiles (art. 311 CPPT) y la fecha a partir de la cual comienza a correr ese plazo es la de la lectura integral de la sentencia (art. 291 del CPPT).

En este caso, los fundamentos de la sentencia fueron vertidos en la misma audiencia (21/04/2023) y el abogado Ferrari presentó el escrito con los fundamentos de su recurso vía Portal SAE el 09/05/2023 a hs. 09:29, por lo que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido (art. 311 del CPPT).

En segundo lugar, se debe analizar si se encuentra cumplido el requisito de impugnabilidad objetiva. En el caso, se trata de una decisión que acepta la aplicación del procedimiento abreviado y que, en consecuencia, dicta una sentencia condenatoria (definitiva), ambos supuestos previstos en el art. 301 del CPPT.

En relación a la impugnabilidad subjetiva, entiendo que no resulta aplicable al caso la limitación prevista en el art. 307 del CPPT (“El querellante podrá impugnar la condena cuando la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida”), en virtud de que la fijación del monto de la pena fue el resultado de la aplicación del procedimiento abreviado (art. 376 del CPPT) al que la parte querellante se opuso, donde estaría involucrado, además, el derecho de la víctima a intervenir en el proceso (arts. 11 y 83 del CPPT, 25 de la CADH).

En tal sentido, además, el art. 3.2 de la ley 9.118 habilita el recurso de apelación para “aquellos casos en que la sentencia de Jueces Penales causen gravamen irreparable”, lo que sucede en este legajo al tratarse de una sentencia que, si bien es condenatoria, es la consecuencia de que haber aceptado la aplicación del procedimiento abreviado, la que cierra definitivamente el proceso por lo que no habrá posibilidad ulterior de reparar los derechos que la querella considera conculcados.

Finalmente, en cuanto a la mención de los motivos y fundamentos del recurso que, de acuerdo al art. 311 tercer párrafo, deben expresarse cada uno por separado con su fundamento, la querella invocó los motivos previstos en los incs. 2 y 3 del art. 304 del CPPT expresando sus fundamentos en forma separada, por lo que este requisito se encuentra cumplido.

En el marco del art. 314 sexto párrafo del CPPT, cuyo análisis, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es “al sólo efecto de evitar continuar con el trámite de un cuestionamiento que pudiera presentarse como manifiestamente inadmisibles o mal concedidos, con el desgaste inútil que implicaría tener que llamar a audiencia oral para recién expedirse en tal sentido. Partiendo de esa base, la habilitación provisorio realizada no provoca gravamen irreparable alguno, ya que la parte beneficiada por la sentencia recurrida podrá, en caso que lo estimara pertinente, controvertir la admisibilidad de la impugnación en la misma audiencia” (causa “Muro Sergio Orlando, Mendelek Juan Carlos y otros s/ Malversación de caudales públicos y otros delitos -art. 260“, sentencia N° 162, entre otros), corresponde sea declarado admisible con carácter provisorio (arts. 295, 301, 304, 306, 314 y concordantes del CPPT).

Por último, corresponde pase a OGA a fines de que prosiga con el trámite del legajo según lo previsto por el art. 314 sexto párrafo del CPPT y se convoque a audiencia dentro del plazo legal.

Por lo que se

RESUELVE:

1) **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE**, con carácter provisorio, el recurso de apelación/impugnación interpuesto por el abogado José Ignacio Ferrari, representante de la querella y del actor civil, en contra de la sentencia de fecha 21 de abril de 2023, dictada por el juez Fernando Luis Zóttoli Ortíz del Colegio de Jueces, conforme lo considerado (arts. 295, 301, 304, 307, 314 y concordantes del CPPT).

2) **PASE a la OGA** a fines de que prosiga con el trámite del legajo según lo previsto por el art. 314 sexto párrafo del CPPT y se convoque a audiencia dentro del plazo legal.

3) **NOTIFÍQUESE** a las partes por intermedio de OGA.

Agustín Francisco Puppio

Juez

Tribunal de Impugnación

Firmado digitalmente por:
CN=PUPPIO Agustin Francisco
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 20288838578

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.

INTERPONGO RECURSO DE IMPUGNACION – EXPRESO AGRAVIOS

OFICINA GESTION DE AUDIENCIA

CAUSA: “AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO”

LEGAJO: S-079024/2021

FERRARI JOSE IGNACIO, querellante y actor civil en autos, a OGA, respetuosamente y conforme derecho,

D I G O:

Que en debido tiempo y forma procesal oportuna vengo por la presente a interponer **RECURSO DE IMPUGNACIÓN** en contra de la sentencia de fecha 21 de Abril de 2023, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación se expondrán.

I. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El presente recurso es interpuesto en los términos del Art. 301 CPPT, en contra de una sentencia definitiva de condena (Art. 304 CPPT), con plena legitimación procesal en base al artículo 307 CPPT y dentro de los términos para su interposición conforme Art. 311 CPPT.

En este sentido como petición inicial, solicito se declare admisible el mismo, se notifique a todas las partes y se remita al tribunal de impugnación oportunamente.

II. OBJETO DE IMPUGNACIÓN

La presente impugnación se impone en contra de la Sentencia de juicio abreviado dictada en fecha 21 de Abril de 2023 por el Dr. Zottoli, en plena inobservancia de los preceptos contenidos en el Código Procesal Penal de Tucumán recayendo la audiencia celebrada y su consecuente resolución en nula de nulidad absoluta.

II. MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

La presente impugnación es interpuesta en los términos del Art.

- Inc. 2: Inobservancia de una garantía constitucional.
- Inc. 3 Errónea aplicación e interpretación de la ley penal de forma.

A continuación y conforme lo normado por el Art. 311 CPPT, los fundamentos de cada motivo de agravio serán expuesto de manera separada.

III. INTRODUCCION

Previo a ingresar a los agravios y sus fundamentos, resulta fundamental poner en conocimiento del tribunal de impugnación, que en la presente causa fue requerido la elevación a juicio oral en fecha 15 de junio de 2022 conforme lo establece el Art. 257 CPPT.

Que el requerimiento de elevación a juicio, constituye un acto conclusivo en los términos del Art. 250.

Que de acuerdo a la literalidad de lo establecido por el Art. 376 CPPT, el procedimiento abreviado resulta admisible “en los delitos de acción publica y durante la etapa preparatoria”.

Que una vez requerido la elevación de la causa a juicio oral, la defensa podrá proponer la realización de un juicio abreviado en los términos del Art. 361.8 CPPT.

IV. AGRAVIOS

- **Inobservancia Garantía Constitucional (Art. 304.2 CPPT)**

Entiende esta parte, que la celebración de la audiencia de juicio abreviado, solicitada por el MPF y aceptada su objeto por el magistrado aquo, resulta categóricamente violatoria del debido proceso legal y principio de legalidad contenido en el Art. 18 CN.

Tal cual se expresa en el acápite “Introducción”, es evidente que se afecto y modifiko la esencia de la estructura del debido proceso, admitiendo la realización de una audiencia por fuera de las etapas procesales reguladas por el digesto penal.

Claramente, el Aquo aceptando la realización de la audiencia, elimino por completo cualquier tipo de preclusión procesal, permitiendo realizar una audiencia cuando de la interpretación de los Art. 250 y 376 Código Procesal Penal, no se podía realizar.

- **Errónea aplicación e interpretación de la ley penal de Forma. (Art. 304.4 CPPT)**

Resulta totalmente evidente, que la aceptación del objeto de la audiencia, por fuera de lo establecido por el Código de forma violenta y agravia de manera categórica las reglas del procedimiento penal y lo regulado por nuestro Código Procesal.

El magistrado, realizó una audiencia de juicio abreviado, cuando la investigación penal preparatoria ya había finalizado, conforme surge del propio requerimiento fiscal y lo normado por el Art 250 (Actos conclusivos).

Esto, lógicamente debe ser analizado desde lo normado por el Art 376 CPP (admisibilidad).

En esta oportunidad, la norma establece que el juicio abreviado solo podrá realizarse durante la etapa preparatoria.

Ahora bien, la inobservancia normativa no tan solo es un agravio meramente formalista para esta querella, sino que existió un perjuicio concreto.

Adviertase, que al momento de efectivizarse el convenio de juicio abreviado, la defensa y el MPF utilizaron elementos probatorios que no había sido ofrecidos en el requerimiento de elevación a juicio ni al momento de ofrecer la defensa prueba.

En concreto me refiero al informe toxicológico de Facundo Robles y al Examen medico forense de Sebastian Agüero.

Estos elementos probatorios, fueron utilizados para fundamentar el monto y modalidad de la pena.

Pena que incluso resultó en el convenio de juicio abreviado totalmente disminuida en su cantidad y modalidad.

En este sentido, no tan solo se llevo adelante una audiencia por fuera de la preclusión procesal, sino que incluso habiéndose admitido el objeto de la audiencia, el magistrado acepto elementos probatorios que no había sido ofrecidos al momento del requerimiento fiscal o ofrecimiento probatorio de la defensa.

No puedo dejar de manifestar, que esta situación fue planteada como cuestión preliminar en la audiencia y rechazada por el Dr Zottolli.

En definitiva, no tan solo se efectuó una audiencia de juicio abreviado por fuera de la etapa procesal oportuna, sino que además, se negaron a efectuar la audiencia en el contexto del Control de la Acusación conforme Art. 261 CPPT.

Porque la circunstancia de juicio abreviado si puede efectuarse en la audiencia de control de la acusación, sin embargo, lógicamente limitado a los hechos y los elementos probatorios que las partes ofrecieron en el requerimiento fiscal, adhesión querella y ofrecimiento de la defensa.

V. PRUEBA (Documental)

A fin de acreditar lo antes indicado, ofrezco como prueba en los términos del Art. 312 CPPT el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y el Ofrecimiento probatorio de la Defensa del Sr. Agüero.

La Prueba que se ofrece es a fin de acreditar los elementos probatorios ofrecidos en esa etapa procesal y poder constatar que efectivamente el MPD y la defensa, utilizaron elementos probatorios por fuera de los ofrecidos oportunamente.

VI. CONCLUSION

Por todo lo antes expuesto solicito:

1. Se declare admisible el presente recurso.
 2. Se declare nula la Audiencia realizada y todo acto consecuente, en especial la sentencia puesta en crisis.
 3. Se hace expresa reserva de ampliar los fundamentos sobre los motivos de impugnación.
 4. Se tenga por ofrecida la prueba documental
 5. Hago expresa reserva del caso federal.
- Proveer de conformidad,

JUSTICIA

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
DR. FERNANDO LUIS ZOTTOLI ORTIZ

ACTUACIONES N°: S-079024/2021-I3



H10150804465

CAUSA: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN s/ HOMICIDIO CULPOSO ART. 84 (1º PARR) VICT. ROBLES FACUNDO FEDERICO - Legajo N° S-079024/2021-I3.

////Siendo 17 de mayo de 2023, informo a S.S. que ingresé al Perfil SAE asignado a UD, verificando que la presente incidencia se encontraba pendiente de ser recibida, cuya radicación fue aceptada y efectuada desde OGA Impugnación en fecha 09 de mayo de 2023. Cabe informar que desde la Unidad de Asistencias y Recepcion de la OGA, se adjuntó resolución de fecha 21/04/2023 suscripta por Ud., y presentación (recurso de apelación) del Dr. FERRARI JOSE IGNACIO de fecha 09/05/2023. **Es mi informe. Matías H. Ormaechea Figueroa. Asistente de Doctrina y Jurisprudencia.**

San Miguel de Tucumán, 17 de mayo de 2023.-

I.- Téngase presente lo informado.

II.- En virtud de ello, y considerando que la resolución atacada resulta impugnabile en virtud de lo normado por el Art. 301 y 304, del CPPT; que existe legitimación para impugnar por parte del recurrente, conforme lo normado por el Art. 307 del CPPT; y los agravios fueron expresados, corresponde: **ACEPTAR** el recurso de apelación incoado por el Dr. Ferraro Jose Ignacio, en representación de la querella. Remitase digitalmente la presente incidencia al Tribunal de Impugnación, para la continuación de su trámite.

FERNANDO LUIS ZOTTOLI ORTIZ

JUEZ

COLEGIO DE JUECES Y JUEZAS - CAPITAL

En igual fecha, radiqué el presente legajo en OGA Impugnación. **Es mi informe. Matías H. Ormaechea Figueroa. Asistente de Doctrina y Jurisprudencia.-FIRMADO DIGITALMENTE**

Certificado Digital:

CN=ZOTTOLI ORTIZ Fernando Luis, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20282231035, Fecha:17/05/2023;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

UNIDAD FISCAL DE ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS

Centro Judicial Capital
Ministerio Público Fiscal
apfiscalia@gmail.com

Legajo: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO
AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2
VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO.**

Legajo N°: **S-079024/2021.**

San Miguel de Tucumán, 14 de Abril de 2023.

AL SEÑOR ENCARGADO DE LA OFICINA

GESTION DE AUDIENCIA

AREA DE JUICIOS Y REQUERIMIENTOS

S_____ / _____ D

Atento a la recepción de la cedula del área de juicios y requerimientos de la OGA, del centro Judicial Capital de Tucumán, pongo en conocimiento que en el día de la fecha se trasladó una propuesta superadora de acuerdo de juicio abreviado a la parte querellante. Por tal motivo la semana que viene se estará solicitando como motivo de audiencia la realización de un acuerdo de Juicio abreviado.

Por lo que consideramos inoportuno el agendamiento de la audiencia de control de acusación a los efecto de una mejor solución del conflicto.

DR. BENJAMIN ZAVALIA- AUXILIAR FISCAL

UNIDAD DE ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS

OFREZCO REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO. -

A LA UNIDAD FISCAL DE ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS. -

CAUSA: "AGÜERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRANSITO". -

LEGAJO: S-079024/2021.-

Dr. PATRICIO CHAR, MP 8570, abogado defensor del imputado Agüero Eduardo Sebastián, y de las demás condiciones personales que constan en el legajo, me presento y respetuosamente digo:

I.- OBJETO. -

Que vengo por este acto procesal, a ofrecer reparación integral del daño, consistente en la suma de \$100.000 (cien mil pesos), pagaderos en un solo pago en efectivo, todo ello a los fines de someter la presente causa, a una salida alternativa la cual es un juicio abreviado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 y 376 del CPPT. -

JUSTICIA. -



PATRICIO CHAR
ABOGADO
M.P. 8570

#0CSRF

Legajo: **S-079024/2021**
Id Audiencia: **21635**
Descripción: **ACTA DE AUDIENCIA - OGA**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
OFICINA DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS.

Acta de Audiencia

#1CSRF

Datos del Legajo:

Legajo: **S-079024/2021**
Carátula: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO
AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO
FEDERICO**

#2CSRF

Datos de la Audiencia:

Tipo de audiencia: **Modificación o revocación de medida de coerción,
Control de prisión preventiva o internación**
Fecha: **2/2/2022**
Sala: **Sala Virtual 14**
Centro Judicial: **Capital**
Juez interviniente: **Isolina Maria Apas Perez De Nucci**

#3CSRF

Datos del/los Imputados:

Imputado: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN**
D.N.I. N°: **33050969**
Domicilio real: **Pasaje Belisario López 1332**
Comparece: **SI**

#4CSRF

Datos de la/las Victima (fallecida):

Víctima: **ROBLES, FACUNDO FEDERICO**
D.N.I. N°: **43848592**
Domicilio real: **Lote 10 la esperanza yerba buena**

#7CSRF

Datos de la Defensa:

Defensor Particular: SI
Nombre del Defensor Particular: Dr. Atria Anibal
Email: anibalatria@hotmail.com
Teléfono: 381 4207226

#8CSRF

Datos de la Fiscalía:

Unidad Fiscal: Unidad Fiscal De Atentados Contra Las Personas
Auxiliar Fiscal: Gustavo Zavalía
Domicilio constituido: Su público despacho

#9CSRF

Datos de la Querella:

Letrado o Apoderado: Dr. Máximo Zerda - Dr. Ignacio Ferrari
Teléfono: 3814 80-2963

Pretensiones de la Defensa:

Min. 00.003.58: Expresa los motivos por los cuales solicitó la presente audiencia siendo el control y/o modificación de la medida de prisión preventiva que pesa sobre su defendido, manifestando que se funda en el art. 238 inc. 1 del CPPT y dice que existen elementos nuevos en la causa que no existían al momento de la primera audiencia, agregando que se han agotado los fundamentos que daban lugar a la medida. Fundamenta su petición.

Min. 00.28.20: corrida vista por S.S., se expide de lo manifestado por el MPF y la querella

Pretensiones MPF:

Min. 00.18.55: Se opone al cese de prisión preventiva. Funda y solicita prórroga de la prisión preventiva por el plazo de un mes.

Intervención de la Querella:

Min. 00.25.33: Se opone a lo peticionado por la defensa del imputado y solicita que se rechace el planteo como así también que se ordene la prórroga de prisión preventiva por el plazo de 3 meses.

Familiares de la víctima:

Minuto 00.34.00: S.S. le cede la palabra a los familiares de la víctima, quienes no realizan manifestaciones.

Observaciones:

- Se encuentran presentes en la audiencia los padres de la víctima fallecida junto a sus abogados.

- Min. 00.41.57: La defensa técnica formula apelación a la resolución.

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL :

CONSIDERANDO: Min. 00.34.13 de Registro Audiovisual

RESUELVE: Min. 00.40.46 de Registro Audiovisual

Iº) NO HACER LUGAR a la solicitud formulada por la defensa técnica de cese de la prisión preventiva formulado en los términos del artículo 238 inc. 1.

IIº) HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de Prisión Preventiva requerida por las partes acusadoras, en relación al encartado AGUERO EDUARDO SEBASTIAN, por el término de 1 mes a contar desde la fecha de su vencimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 inc 3 del CPPT.

IIIº) Quedan todas las partes debidamente notificadas, conforme a lo dispuesto en el art 112 y 131 inc fine del CPPT.

IVº) DISPONER el inmediato traslado del imputado, desde su actual lugar de alojamiento a la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, previo tramites de rigor en caso de no haberse efectivizado hasta la fecha.

Vº) TENER PRESENTE el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica.

Datos complementarios a consignar por OGA:

Hora de inicio programada: 08.00

Hora real de inicio : 07.57

Hora finalización: 08.39

Registro de audio: Si, a disposición de las partes.

Personal de acta: María Lourdes Robles

Número de registro digital: [Haga clic aquí para escribir texto.](#)

FISCALÍA REGIONAL
DEL CENTRO JUDICIAL CAPITAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

CAUSA: "AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO".-

LEGAJO: S-079024/2021.-

San Miguel de Tucumán, 02 de marzo de 2023.-

Y VISTOS: Las constancias de la causa, el planteo de recusación ingresado por la querella, las manifestaciones al respecto realizadas por el Sr. Fiscal de la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, Dr. Diego A. Hevia, y en pleno uso de las facultades que me otorga el art. 94 Quinquies de la Ley Orgánica de Tribunales, el art. 94 y 56 del NCPPT., corresponde expedirme al respecto, lo que se hará seguidamente.-

Y CONSIDERANDO:

Antes de ingresar en al fondo del planteo y a los fines de que se advierta de manera clara e integral los fundamentos que sustentan

mi decisión, corresponde realizar un recuento de las partes pertinentes de la presente causa.-

1.- Así, conforme surge del hecho imputado en audiencia de fecha 01/04/2022, en esta causa se investigó un accidente de tránsito ocurrido el día 20 de diciembre de 2021, aproximadamente a horas 01:10, protagonizado por Eduardo Sebastián Agüero y Facundo Federico Robles.-

Que, de la dinámica investigada -apoyada en las constancias de la causa- surge que Eduardo S. Agüero circulaba conduciendo un automóvil marca Volkswagen Gol, dominio NST 575, por Ruta provincial 301, Punta del Monte, de la localidad de San Pablo, por su carril hacia el Norte, bajo los efectos del alcohol (1.5 g/l de sangre).-

Por su parte, Facundo F. Robles lo hacía manejando una motocicleta Honda CG Titán, dominio A007JHL, por su carril pero hacia el Sur. Tal es así que al arribar Agüero a la altura de la intersección Ruta Prov. 301, Avenida Virgen del Pilar, realizó una maniobra invadiendo el carril contrario, violando la señal preventiva horizontal de doble línea amarilla, lo que no le dio ni tiempo ni espacio al conductor de la motocicleta para evadir el choque y terminó impactando su motocicleta en la parte frontal del lado derecho del automóvil. Luego de ello, se produjo un segundo impacto entre el cuerpo del conductor de la motocicleta en el marco de la parte superior del automóvil, provocando en definitiva la muerte de Facundo Federico Robles en atención a las lesiones sufridas.-

2.- La causa fue investigada en su totalidad por la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas desde su radicación en dicha

fiscalía (20/12/2021). Así, se solicitaron e incorporaron en tiempo y forma toda la evidencia pertinente para la investigación de un suceso de estas características, es decir, carpeta técnica, informes del laboratorio, informes técnicos accidentológicos, informes policiales, autópsicos y testimoniales.-

3.- Por su parte, el 22/12/2021 se realizó una audiencia ante el Sr. Juez del Colegio de Jueces, Dr. Gonzalo Javier Ortega, en donde se formuló cargos y se dispuso, entre otras cosas, la legalidad de la aprehensión del imputado Agüero y se ordenó prisión preventiva, que fue prorrogada por la Dra. Isolina Apas Pérez de Nucci el 02/02/2022, por la Dra. Ballesteros el día 04/03/2022 y por el Dr. Ortega el 01/04/2022, hasta que se dispuso su libertad en 28/04/2022.-

4.- Ahora bien, el 07 de junio de 2022, el Sr. Fiscal, Pedro León Gallo, por entonces subrogante de la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas requirió la apertura a juicio de la presente causa seguida en contra de Eduardo Sebastián Agüero por considerarlo presunto autor responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, doblemente agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a 1 gr/l de sangre y por no intentar socorrer a la víctima (art. 84 bis, segundo párrafo del CP). En dicho requerimiento se consignó una pretensión punitiva de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos con motor.-

De dicho requerimiento se corrió traslado a la querella el 07/06/2022 mediante mensaje de Whatsapp y el 08/06/2022 mediante mostrador virtual.-

Mientras que el 15/06/2022, los representantes de la parte querellante adhirieron en la totalidad a la pieza acusatoria y promovieron demanda (ya tenían rol de actor civil) por un total de \$18.100.000 (dieciocho millones cien mil pesos), aunque en su objeto exponen que Agüero sería responsable de “homicidio simple con dolo eventual, art. 79 del CP”, lo que resulta contradictorio con la adhesión realizada anteriormente.-

5.- El 18 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia de control de acusación ante el Dr. Javier Ortega, la que fue suspendida por pedido de las partes ya que pretendían tratar la posibilidad de arribar a un juicio abreviado.-

6.- Sin que conste en el legajo pero conforme lo expone la querella, en los días sucesivos hubo un acercamiento de partes y de manera informal se había llegado a un acuerdo sobre una pretensión punitiva de 3 años de prisión, aunque no se lo había formalizado.-

7.- Luego de ello, el 24/08/2022 se llevó adelante una audiencia de juicio abreviado ante el Sr. Juez, Dr. Gonzalo Ortega, en donde participó el Sr. Fiscal, Dr. Pedro L. Gallo, el auxiliar fiscal, Dr. Gustavo B. Zavalía por el MPF; el Dr. Ruiz Belmonte y Patricio Char por la Defensa del imputado –quien también estuvo presente-; y la querella representada por el Dr. Ferrari y el Dr. Zerda; y en la cual se dispuso aceptar el procedimiento abreviado de acuerdo pleno y se condenó a Sebastián Eduardo Agüero a la pena de Tres (3) años de prisión de ejecución condicional y Cinco (5) años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos con motor, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor agravado

por encontrarse el conductor con un nivel de alcoholemia superior a 1 gr/l de sangre.-

8.- La querella impugnó dicha decisión y mediante resolución de fecha 06/02/2023 el Juez del Tribunal de Impugnación, Dr. Agustín Francisco Puppio, dispuso en lo pertinente: *“2) HACER LUGAR al recurso interpuesto, ANULAR la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 y REENVIAR el legajo al Colegio de Jueces para que un tribunal diferente emita un nuevo pronunciamiento previa realización de una nueva audiencia de juicio penal abreviado que corresponde realizar, conforme lo considerado (arts. 1, 9, 11, 13, 83, 138.2.b, 140, 289, 295, 296, 315, 317, 377 y concordantes del CPPT)”*.-

Tratamientos de los motivos de la recusación

9.- Ante éste contexto la querella pide que se recuse a la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas ya que: *“no se encuentra observando las disposiciones reguladas por el Art. 96 CPPT, en especial la Protección de la Víctima en la adopción o requerimiento de medidas necesarias para su protección, favoreciendo su intervención en el proceso disminuyendo o haciendo cesar cualquier perjuicio del delito o consecuencias ulteriores. (Art. 96.1)”*.-

Que a su criterio, dicha unidad fiscal no actúa objetivamente; hace más de 20 días que fueron notificados de la sentencia que anula la condena y vuelve la causa a la etapa de control de acusación sin que el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, requiera audiencia por ante la OGA.-

10.- Corrida vista al Sr. Fiscal a cargo de la Unidad de Atentados Contra las Personas, Diego Hevia, el mismo destaca que el planteo debe rechazarse pues, en primer lugar, la recusación no alude ni fundamenta ninguna de las causales establecidas en el art. 98 del NCPPT con remisión al art. 56 del mismo digesto. Que dicho convenio no fue suscripto por él, sino por su par, Dr. Pedro L. Gallo, por lo que le sorprende que ahora se lo recuse ya que él no intervino en ninguna de las etapas alegadas por la querella.-

Pero que más allá de ello, no comparte lo manifestado por la querella de que la unidad a su cargo no cumple con las exigencias legales de dar a la víctima un trato digno y respetuoso ya que por el contrario, siempre se mantiene como buena práctica una comunicación fluida con las víctimas o familiares de los legajos en los que toman intervención, brindando en todo momento un trato digno y respetuoso en el que se vela siempre por la integridad física, psicológica y emocional de las mismas, tomando todo tipo de medidas para su protección favoreciendo su intervención en el proceso disminuyendo o haciendo cesar cualquier perjuicio del delito o consecuencia ulteriores. (Art. 96.1).-

Que, contrariamente a lo que manifiesta la querella sí se corrió oportunamente traslado del convenio arribado habiéndose notificado de modo desformalizado al número de teléfono denunciado en fecha 23/08/2022 a las 18:47, por lo que conocían de todos los alcances del acuerdo del juicio abreviado.-

Por último considera que los términos de la recusación ingresada por el letrado Ferrari, en el sentido de que “fue engañado” por esa unidad al haber impulsado un acuerdo de juicio abreviado por una pena diferente a la solicitada en el requerimiento de apertura a juicio,

son términos absolutamente desatinados por lo que solicita que se advierta al letrado sobre el modo de expresarse en sus escritos judiciales.-

11.- Así las cosas y en atención al escenario planteado, considero importante realizar algunas consideraciones al respecto:

a) En primer lugar destacar que los motivos de recusación de fiscales se encuentran previstos en el art. 98 del Código Procesal Penal de Tucumán (ley 8933).-

Allí, con remisión al art. 56 de igual digesto, se indican taxativamente los motivos de recusación, que son:

- *Pronunció o contribuyó a dictar sentencia en la misma causa o dictó el auto de apertura del debate. Tampoco podrá intervenir en el proceso de reenvío;*

- *Pronunció o contribuyó a dictar la decisión impugnada no podrá intervenir en el proceso que sustancia la impugnación y en su decisión, salvo el caso de la reposición;*

- *Pronunció o contribuyó a pronunciar el auto de apertura del debate o alguna decisión anterior a ese debate, no podrá integrar el tribunal de juicio o de reenvío;*

- *Si en la causa intervino o interviene su cónyuge o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad, quien ha sido su tutor, curador o guardador o quien está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda;*

- Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso anterior estuviere interesado en la causa o tuviere juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratase de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores o de entidades civiles abiertas o amplias;

- Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso 5, recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratase de instituciones estatales o de entidades crediticias constituidas como sociedades anónimas, o si, después de comenzado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor;

- Si, antes de iniciado el proceso tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;

- Cuando medien otras circunstancias que, por su gravedad, afecten su imparcialidad. El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los cinco primeros incisos deberá denunciarlo inmediatamente, al tomar conocimiento de su situación respecto de la causa, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso respectivo. En el caso del inciso 8), el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de informar a los intervinientes sobre la situación en que se halla.-

Como surge claramente de la lectura de los artículos referidos, la recusación es personal y necesariamente debe ser por algunos de los motivos expuestos.-

De plano, considero incorrecto el planteo de la querella al recusar a la “Unidad Fiscal” y no al “Fiscal” a cargo, pues, como dije,

la recusación necesariamente debe ser de carácter personal ya que lo que se trata de impedir es el ejercicio abusivo del poder por parte de un Fiscal/juez condicionado al existir alguna de las causales previstas en el Código Procesal.-

Pero más allá de ello y de haberse recusado al fiscal a cargo (Dr. Diego Hevia), debe decirse que los actos procesales por los que alega haber sido perjudicado no fueron suscriptos por parte de aquél sino por su par, Dr. Pedro Gallo que en ese momento se encontraba a cargo de dicha fiscalía, por lo que de todos modos el argumento por el que recusa devendría en abstracto.-

Tampoco advierto que se haya materializado alguna de las causales que taxativamente prevé el CPPT para la recusación. Y del mismo modo debo decir que la querella tampoco lo ha hecho en su escrito, sólo se limitó a reproducir argumentos basados en una supuesta afectación a los derechos de la víctima pero que no constituyen causal de recusación, y que además ya fueron tratados y resueltos por una autoridad jurisdiccional.-

Que en efecto, sin fiscal recusado, ni motivos de recusación para ser tratados, mi decisión no puede ser otra que el rechazo *in limine* del planteo recusatorio ingresado.-

b.- Aprovecho la oportunidad para ratificar lo manifestado por el Sr. Fiscal, Diego Hevia, en relación a la política de trabajo que viene sosteniendo el Ministerio Público Fiscal para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de los delitos, en especial, a ser oídos, asesorados, asistidos y debidamente representados a lo largo del proceso, observando estrictamente lo establecido en los arts. 11, 12, 13, ss. y ccdtes. del CPPT; Ley N°: 27.372 referente a los Derechos de las Personas Víctimas de Delitos, y lo

previsto por la normativa internacional de los derechos humanos en la materia.-

c.- Asimismo corresponde recordarle al letrado representante de la querella que conforme lo disponen los arts. 260 y 261 del CPPT, las audiencias cuyo objeto son el control de la acusación deben ser fijadas por la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) y no por el Ministerio Público Fiscal, por lo que no existe una pretensa inactividad de la fiscalía como alega el letrado.-

d.- Por último, no puedo pasar por alto las manifestaciones referidas por el letrado José Ignacio Ferrari al sostener que *“nos animamos a sostener, que fuimos hasta “engañados” por un Requerimiento de Elevación a juicio, que género en nosotros una adhesión que luego fue menospreciada para arreglar por fuera de nuestro conocimiento con la Defensa técnica una finalización del proceso penal”*.-

Afirmo de manera categórica que de ninguna manera el MPF ha realizado un acto que implique defraudar los intereses de las víctimas en la presente causa, mucho menos al tratarse de un procedimiento previsto, reglado, sometido a la decisión jurisdiccional y del que ha participado activamente la víctima y sus representantes.-

Por lo demás, considero poco felices las expresiones utilizadas por el letrado José Ignacio Ferrari, por lo que corresponde recomendarle que en lo sucesivo se dirija con el trato digno y respetuoso que corresponde y que le impone la Ley de Ética en el ejercicio profesional y la legislación afín.-

Por todo lo expuesto, resuelvo:

1.- **RECHAZAR** el planteo de recusación ingresado por la querella en contra de la unidad fiscal de atentados contra las personas;

2.- **RECOMENDAR** al Dr. José Ignacio Ferrari que en lo sucesivo se dirija con el trato digno y respetuoso que le impone la legislación vigente en la materia;

3.- **REMITIR** el presente legajo nuevamente a la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas a los fines de su prosecución.-

FERNANDEZ
Z Mariano
Eduardo

Digitally signed
by FERNANDEZ
Mariano Eduardo
Date: 2023.03.06
13:31:25 -03'00'

UNIDAD FISCAL DE ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

LEGAJO nº: **S-079024/2021**

CARATULA: **AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO
AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT:
ROBLES FACUNDO FEDERICO.-**

DECRETO

San Miguel de Tucumán 01 de Marzo de 2023

En fecha 28/02/2023 en el marco de la causa caratulada AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO,

Legajo: S-079024/2021, se me corrió vista de la recusación presentada en fecha 28/02/2023 por el Dr. Ferrari por ante el Fiscal Regional Dr. Mariano Fernández, cuyas alegaciones a continuación paso a contestar:

- 1) En primer lugar, considero que la recusación planteada por el Dr. Ferrari José Ignacio debe rechazarse de plano, considerando que no alude ni fundamenta ninguna de las causales establecidas en el art. 98 CPPT, con remisión al art 56. Asimismo debe tenerse presente que quien suscribió dicho convenio el 23/08/2022, fue el Dr. Pedro León Gallo Fiscal quien subrogaba en ese momento la Fiscalía de Atentados Contra las Personas, y que recién en fecha 04/11/2022 asumí como Fiscal Titular de dicha

Unidad Fiscal. Sorprende en consecuencia la recusación, si se considera que no intervine en ninguna de las etapas transitadas en el proceso, y que es el mismo letrado quien acompaña piezas procesales en las que no intervine ni firmé.-

2) Igualmente desacertada resulta la afirmación de la querella de que esta unidad fiscal no cumplió con las exigencias legales de dar a la víctima un trato digno y respetuoso, dar información del estado del legajo o escucharla antes de la toma de decisiones. Por el contrario, cabe mencionar que como buena práctica se mantiene una comunicación fluida con las víctimas o familiares de los legajos en los que tomamos intervención, con sus representantes legales, brindando en todo momento un trato digno y respetuoso en el que se vela siempre por la integridad física, psicológica y emocional de las mismas, tomando todo tipo de medidas para su protección favoreciendo su intervención en el proceso disminuyendo o haciendo cesar cualquier perjuicio del delito o consecuencia ulteriores. (Art. 96.1).

3) Adiciono que esta Unidad Fiscal presentó, en ejercicio de sus facultades legales, un convenio de Juicio Abreviado, del cual se le corrió vista a la querella en el presente legajo en fecha 23/08/2022 a las 18:47 de modo desformalizado al número de teléfono de los abogados querellantes, dejando asentado en el Sistema Informático Sial de este Ministerio Publico. De esta gestión tomó conocimiento el Dr. Ferrari José Ignacio y el Dr. Máximo Zerda como representante querellante en los presentes autos de todos los alcances del acuerdo de juicio abreviado pleno arribado

en su momento, logrando así este Ministerio Público un claro y transparente manejo de información sobre la presente causa.

- 4) Finalmente corresponde hacer una referencia a los términos de la recusación impetrada por el letrado Ferrari quien sostiene que “fue engañado” por esta unidad fiscal al haber impulsado un acuerdo de juicio abreviado por una pena diferente a la solicitada en el requerimiento de apertura a juicio. Tales expresiones resultan absolutamente desatinadas, sea que hayan sido dirigidas hacia el suscrito, o hacia mi distinguido y honorable colega el Dr Pedro Gallo quien rubricó el convenio, por lo que solicito en lo sucesivo se advierta al letrado sobre el modo de expresarse en sus escritos judiciales.-

Por todo lo expuesto, considero debe rechazarse la recusación interpuesta por la parte querellante.-

HEVIA
Diego
Sebastian

Firmado
digitalmente por
HEVIA Diego
Sebastian
Fecha: 2023.03.02
09:13:52 -03'00'

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

MINISTERIO PUBLICO FISCLA

FISCALIA REGIONAL

CAUSA: AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ART. 84 BIS PÁR. 2 VICT: ROBLES FACUNDO FEDERICO.-

LEGAJO: S-079024/2021.-

San Miguel de Tucumán; 28 de febrero de 2023.-

En atención al tenor del planteo ingresado por el letrado José Ignacio Ferrari, y previo a todo trámite, córrase traslado al Sr. Fiscal de la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, Dr. Diego Hevia, a los fines de que se expida al respecto.-

RECURSO CON CAUSA – FALTA DEBER DE OBJETIVIDAD

FISCALIA REGIONAL - CAPITAL

**CAUSA: “AGUERO EDUARDO SEBASTIAN S/ HOMICIDIO CULPOSO”
LEGAJO: S-079024/2021**

FERRARI JOSE IGNACIO, querellante y actor civil
en autos, a OGA, respetuosamente y conforme derecho,

D I G O

Que vengo por la presente en los términos del Art. 98 CPPT a plantear recusación del Fiscal Dr. Diego Hevia y sus dependientes (fiscales auxiliares) titular de la UNIDAD FISCAL ATENTADO CONTRA LAS PERSONAS, por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación se exponen.

En primer lugar, sostener que fundamentamos el planteo en los términos del Art. 96.1 (Protección de las víctimas) y Art. 96.2 (Deber de objetividad) del Código Procesal Penal de Tucumán.

Asimismo, revistiendo el carácter de Querellante particular y Actor civil, nos encontramos legitimados para interponer la presente recusación en los términos del Art. 98 2do Párr. CPPT.

I. ANTECEDENTES

En **fecha 7 de Junio** de 2022, la Unidad Fiscal Atentado contra las Personas, Requirió la Elevación a Juicio en contra del Sr. Agüero Sebastián por ser responsable penalmente del delito de Homicidio Culposo por conducción imprudente, antirreglamentaria de vehículo automotor, doblemente agravado por encontrarse el conductor con un nivel de alcohol superior a 1gr/l y por no socorrer a la víctima conforme Art. 84 Bis 2do Párr. C, estableciendo una pretensión Punitiva de 5 años de Prisión.

Posterior a ello, esta Querella presento adhesión íntegramente al Requerimiento Fiscal, por entender que estábamos frente a un requerimiento bien fundado, objetivo y conforme a derecho, todo ello de acuerdo a las evidencias que durante la investigación penal preparatoria se recolectaron.

En Fecha **18 de agosto de 2022** se fijó fecha de Audiencia para Control Acusación, la cual a pedido de la Defensa y Fiscalía, fue suspendida (con adhesión de la Querella) a los fines de tratar una salida de juicio abreviado conforme Art. 261.8 CPPT. Audiencia presidida por el Dr. Gonzalo Ortega.

Durante los días posteriores hubo acercamiento de partes, en las cuales de manera informal se había llegado a un acuerdo sobre una pretensión punitiva de 3 años efectiva. Reitero, de manera informal.

En ese lapso temporal, se fijó fecha de audiencia de Juicio Abreviado para el día 24 de Agosto de 2022, sin embargo nuevamente aclaro, el posible acuerdo de juicio abreviado con una pena de 3 años de prisión efectiva no había sido formalizado en ningún punto.

Llamativamente, en fecha 23 de agosto, un día previo a la audiencia de Juicio Abreviado (24/08/22), el MPF nos puso en conocimiento que “intentaría” (*palabras textuales*) hacer un Acuerdo de Juicio Abreviado por 3 años condicionales.

Incluso, se nos remitió vía Whatsapps el acuerdo de Juicio Abreviado ya firmado por el Fiscal Pedro Gallo, titular en ese entonces de la fiscalía el día 23 de Agosto a 19:00Hrs, es decir, menos de 24 Has de la Audiencia, sin siquiera darnos ningún tipo de participación u opinión en el acuerdo.

En fecha **24 de agosto** se llevó a cabo la Audiencia de Juicio abreviado, la cual fue resuelta favorablemente por el Dr. Ortega. En dicha oportunidad, sostuvimos que no formamos parte de ningún tipo de acuerdo y que incluso de haber escuchado los fundamentos del Acuerdo, el mismo devenia arbitrario toda vez de que no fundamentaba el MPF cuales eran los elementos o circunstancias a que su criterio cambiaron entre el REJ

con una pretensión punitiva de 5 años a un juicio abreviado por 3 años de prisión condicional.

Logicamente ante esta sentencia de fecha 24 de Agosto, interpusimos Recurso de Apelación, el cual fue inicialmente declarado admisible y fijada fecha de audiencia el día 22 de diciembre de 2022.

Posteriormente a la Audiencia, en fecha 06 de Febrero de 2023, el Dr. Agustín Puppio resolvió:

***“HACER LUGAR** al recurso interpuesto, **ANULAR** la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 y **REENVIAR** el legajo al Colegio de Jueces para que un tribunal diferente emita un nuevo pronunciamiento previa realización de una nueva audiencia de juicio penal abreviado.”*

Entre sus fundamentos el Juez reconoció:

“Es que resulta razonable un planteo de estas características frente a una situación en donde, según lo ha manifestado el representante de la querella sin ser refutado puntualmente por el MPF ni por la defensa, se trató de un acuerdo al que llegaron éstos últimos en un breve lapso previo sin participación alguna de la parte querellante durante su negociación. Así, el querellante se había adherido a un requerimiento de apertura a juicio que contenía una pretensión punitiva de cinco años de prisión que difiere en cuanto al monto y a la modalidad del acuerdo presentado, por lo que era lógico y razonable que, frente a su oposición, se dieran en la sentencia los fundamentos acerca de cómo se llega a la medida de pena propuesta en el acuerdo.

En estos aspectos, no hubo una participación cabal de la parte querellante en el proceso de juicio abreviado, menoscabando su derecho a participar en la resolución del conflicto surgido del hecho (arts. 11, 13, 83 inc. 5 y 376 del CPPT) y, como lo expresó la Corte, a obtener una sentencia fundada, en particular frente a las objeciones lógicas ante la modificación -en cierto modo sorpresiva- en la pretensión punitiva por parte de la acusación pública.

II. RECUSACION CON CAUSA

Ahora bien, tal cual se puede advertir de los antecedentes pasados, esta Querella fue totalmente pasada por alto durante este periodo por parte del MPF.

Entendemos que fueron violentados los Derechos consagrados en el Nuevo Código Procesal Penal regulados por el CAPÍTULO 6 Sección 1 “Derechos Fundamentales”.

Especialmente los referidos a:

- *Ser informada del Estado del Proceso (Art. 11 - 86.5)*
- *Trato Digno y respetuoso (Art. 83.1).*
- *Ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal (Art. 83.7).*
- *Protección de la Víctima (Art. 86).*

Asimismo consideramos, que la unidad Fiscal no se encuentra observando las disposiciones reguladas por el Art. 96 CPPT, en especial la Protección de la Víctima en la adopción o requerimiento de medidas necesarias para su protección, favoreciendo su intervención en el proceso disminuyendo o haciendo cesar cualquier perjuicio del delito o consecuencias ulteriores. (Art. 96.1).

Tampoco nos encontramos ante una actuación objetiva conforme Art. 96. CPPT. Ya que tal cual lo sostenido por esta parte en la Audiencia de impugnación y lo resuelto por el Tribunal de Impugnación, “, **se trató de un acuerdo al que llegaron éstos últimos en un breve lapso previo sin participación alguna de la parte querellante durante su negociación. Así, el querellante se había adherido a un requerimiento de apertura a juicio que contenía una pretensión punitiva de cinco años de prisión que difiere en cuanto al monto y a la modalidad del acuerdo presentado, por lo que era lógico y razonable que, frente a su oposición, se dieran en la sentencia los fundamentos acerca de cómo se llega a la medida de pena propuesta en el acuerdo.**”.

Tampoco puede perderse de vista, que hace más de 20 días fuimos notificados de la sentencia que anula la condena y vuelve la causa a la Etapa de Control de la Acusación, sin que el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, requiera audiencia por ante la OGA.